

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **GLORIA PATRICIA MÚNERA PINEDA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S. A) tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-014-2019-00449-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

#### 1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

**Como fundamento fáctico de sus pretensiones** relata la actora, que estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES desde el 6 de agosto de 1986 donde permaneció hasta el mes de julio de 1996, y posteriormente se trasladó al RAIS por medio de la AFP PROTECCIÓN S.A. en marzo de 1997.

Manifiesta que los asesores de PROTECCIÓN S.A. no le brindaron una correcta asesoría, pues no le informaron sobre las implicaciones y consecuencias de trasladarse del RPM al RAIS, ni tuvieron en cuenta la trascendencia de la decisión que estaba motivando a la actora, a partir de un evidente ocultamiento de información relevante, ni le informaron que de afiliarse al RAIS perdería los beneficios del RPM, ni

acerca del sistema de financiación de la pensión en cada régimen, ni sobre la garantía de pensión mínima, ni el tema de las aseguradoras, ni siquiera sobre su propia situación pensional, solo le indicaron que el ISS se iba acabar y que muy seguramente los afiliados a dicha entidad perderían sus cotizaciones y el derecho a pensionarse en un futuro.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

El *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, entendiéndose que la demandante se ha mantenido afiliada al RPM, de manera permanente y sin solución de continuidad.

Consecuencialmente condenó a la AFP PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES, dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo los rendimientos financieros y las comisiones de administración, que incluye los seguros previsionales y la garantía de la pensión mínima a partir de 01 de mayo de 1997.

De otro lado, ordenó a PROTECCIÓN S.A. a que comunique dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria, de la sentencia la decisión a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES, para los efectos legales correspondientes.

Finalmente declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas y condenó en costas a PROTECCIÓN S.A. en favor de la demandante.

Para fulminar condena, el *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional que se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen y la carga de las AFP de demostrar que efectivamente entregaron la debida información a la afiliada al momento del traslado.

Seguidamente expuso que en el presente proceso no se probó por parte de las AFP que hayan cumplido con su deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de ese consentimiento informado la suscripción del formulario de

afiliación, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado de la demandante a PROTECCIÓN S.A.

Arguye que a pesar de que el acto es válido dicho acto jurídico no tiene efecto por haberse violentado el deber de información, ya que el juzgado considera que las reglas que viene decantando la jurisprudencia se ve plasmada en el presente proceso.

Finalmente, declaró no probada la excepción de prescripción al considerar que, la validez del traslado de régimen se trata de un derecho íntimamente ligado a la pensión, mismo que es un derecho fundamental imprescriptible.

### **3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:**

La anterior decisión fue apelada por las apoderadas judiciales de PROTECCIÓN S.A. y de COLPENSIONES, en los siguientes términos:

#### **APELACIÓN DE PROTECCIÓN S.A.**

La apoderada de PROTECCIÓN S.A. apela la sentencia, argumentando que manifiesta el despacho que PROTECCIÓN S.A. no probó de manera debida la asesoría realizada, pero no se le puede desconocer el valor probatorio que tiene el formulario de afiliación respecto al artículo 244, puesto que para el momento de la época era el único de los requisitos establecidos para determinar la voluntad de afiliación de una persona a las AFP de acuerdo al artículo 13 y 114 de la Ley 100 de 1993.

Expone que la demandante se encuentra en la prohibición inmersa del artículo 2 de la Ley 717 de 2003, que establece que cuando a una persona le falten 10 o menos años de la edad para pensionarse no podrá ser trasladado de régimen, además la demandante tenía unas obligaciones respecto del estatuto financiero en el artículo 6, que establece que deben cerciorarse, preguntar, informarse y preocuparse por las implicaciones de lo que está firmando al momento de la afiliación, pero la demandante no se preocupó por saber del tema.

Manifiesta que referente a los gastos de administración y seguros previsionales, durante todo el tiempo que la demandante estuvo afiliada a PROTECCIÓN S.A., esta cumplió de manera diligente, realizando una buena gestión de administración de los dineros depositados, como se constata en los rendimientos financieros, además conforme al artículo 1746 del Código Civil se indica que aunque declare una

ineficacia y se haga la ficción que nunca existió el contrato, no se puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y mejoras, puesto que los rendimientos financieros son producto de la buena gestión de administración, por lo que PROTECCIÓN S.A. los debe conservar.

Aduce que, al declararse la devolución de dichas sumas, se estaría constituyendo un enriquecimiento sin justa causa a en el que se beneficia a la demandante, se generaría un detrimento del patrimonio de PROTECCIÓN S.A., además PROTECCIÓN S.A. está imposibilitado en recobrar dicho pago toda vez que son emolumentos generados por medio de un tercero, el cual asegura todos los riesgos que se pueden presentar.

Indica que, frente a la condena en costas, PROTECCIÓN S.A. siempre ha actuado de acorde a los principios de buena fe, la buena concordancia con las buenas costumbres, y en apego a las normas establecidas para la época en cuanto a la afiliación de las personas a la entidad, por lo no es posible que se reconozca dicha sanción por parte de PROTECCIÓN S.A.

Por lo anterior solicita al Tribunal revocar la sentencia de primera instancia, en especial la devolución de gastos de administración y seguro previsional.

#### **APELACIÓN DE COLPENSIONES**

La apoderada de COLPENSIONES apela la sentencia, solicitando al Tribunal revocar la sentencia de primera instancia de manera parcial, primero frente a la ineficacia de la afiliación, se indica que la demandante realizó su afiliación al fondo a través de un acto libre y voluntario, por lo que conforme a las sentencia SL 4964, SL 4989 de 2008 y SL 1421 de 2019, se ordene a PROTECCIÓN S.A. que además de los aportes y rendimientos, traslade el valor de los gastos de administración, aportes al Fondo de Pensión de Garantía Mínima y las cuotas del seguro previsional, en general todas aquellas sumas que se le hayan descontado a la afiliada, y de forma indexada.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, la apoderada de COLPENSIONES allegó escritos de alegaciones, anotando resumidamente que Colpensiones como entidad pública actuó de buena fe, y no tuvo incidencia en la afiliación del traslado efectuado por el demandante y la AFP, por ende obedeció a la libre elección y ejercicio del derecho consagrado en el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, y por ser

un tercero ajeno a ese negocio jurídico no puede verse ni beneficiado ni perjudicado por el error que se produjo entre las partes.

Asimismo, se tenga en cuenta que si se negó el traslado del demandante, hacia a la entidad Colpensiones, fue en base del mandato legal consagrado en el artículo 13 literal e) de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 797 del 2003, la cual impide a las administradoras trasladar o afiliar a una persona cuando faltare diez o menos años para adquirir la edad o para pensionarse, esto con el fin de que la administradora dentro de ese periodo pudiera de cierta forma madurar el capital para luego ser reconocida y pagada la prestación económica y por consiguiente, para que no se vea afectado el sistema financiero de pensiones.

Por otro lado, no se echa de menos la línea jurisprudencial tejida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que los fondos de pensiones deben brindar información concreta, completa y veraz, donde se indique al afiliado los beneficios y pérdidas que acarrea el traslado, pero si en gracia de discusión se admitiera que dicha obligación fue omitida por los fondos codemandados, el traslado deprecado se ve truncado, gracias al saneamiento tácito de la nulidad que hizo el afiliado, pues frente a los reparos que aquí menciona y en lugar de devolverse al RPM, siguió efectuando cotizaciones al RAIS, luego la eventual nulidad o ineficacia, se encuentra saneada, de conformidad con los Artículo 172 a 1756 del Código Civil.

Ahora bien, la Corte ha sostenido que dicha diversidad de trato no puede considerarse per se contraria al Texto Superior, pues es indispensable demostrar la irrazonabilidad del tratamiento diferente y, más concretamente, la falta de adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida en el logro de un fin constitucionalmente admisible.

Desde esta perspectiva, el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes. No sobra mencionar en este punto, que el sustento actuarial es el que permite asumir los riesgos que se encuentran involucrados con el sistema y que, en ese orden de ideas, su falta de ajuste con la

realidad económica del país, simplemente podría llegar a poner en riesgo la garantía del derecho pensional para los actuales y futuros pensionados.

En esa medida solicito al Honorable Tribunal Superior de Medellín, que conforme a las sentencias SL 4964 SL 4989 del 2008, SL 1421 y SL 1688 del 2019, se ordene a la administradora de pensiones y cesantías Porvenir, que además de los reportes y rendimientos, se traslade el valor de todos los gastos de administración, aportes al fondo de pensión de garantía mínima y cuotas de seguro provisional, en general todas aquellas sumas que hayan sido descontadas de lo aportado por la demandante y por consiguiente, que todos estos aportes o estas devoluciones sean indexados.

#### **5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:**

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

#### **6. CONSIDERACIONES:**

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, se consultará la sentencia en favor de esta última entidad por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a

su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a las afiliadas o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

Es así como, en el presente asunto, está probado, que la actora, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, según historia laboral emitida por COLPENSIONES visible a folios 30 a 32 del documento 04 del expediente digital, se afilió a la administradora del RAIS PROTECCIÓN S.A. el 03 de marzo de 1997, como se anota en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 35 del documento 06 del expediente digital, con efectividad al 1° de mayo de 1997 como se anota a folio 38 del documento 06 del expediente digital.

De otra parte, en este caso, si bien la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1° de abril de 1994 con 35 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1997 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:22:40 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento (Documento 20 del expediente digital), no se advierte que esta haya confesado que el asesor de la AFP PROTECCIÓN S.A. le hubiese brindado la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no manifiesta que se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, conforme lo señaló el *a quo*, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción preimpresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probaron las AFP, siendo su carga, como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de el *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1997 cuando se trasladó del RPM administrado en ese momento por el ISS hoy COLPENSIONES a la AFP PROTECCIÓN S.A.



De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES por PROTECCIÓN S.A., la orden impartida por la *a quo*, en principio se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, sin embargo no existe la debida precisión de los dineros a transferir, pues el juez no hizo mención a la devolución del porcentaje del reaseguro de Fogafín, por lo que se precisa en esta instancia, que PROTECCIÓN S.A., debe devolver a Colpensiones la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole, pues contrario a lo manifestado por la apoderada de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de alzada, al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación dlla actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e*

*intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.*

*“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.*

*“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”*

Asimismo, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de las AFP demandadas, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, la que acarrea como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir con su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

De otra parte, respecto de la solicitud de la apoderada de COLPENSIONES en el recurso de alzada en el sentido que las sumas a devolver por la PROTECCIÓN S.A. referentes a los gastos de administración, aportes al Fondo de Pensión de Garantía Mínima y las cuotas del seguro previsional, deben hacerse de manera indexada, esta Sala del Tribunal es del criterio, que si la indexación se solicitó en la contestación de la demanda, o al menos en el recurso de apelación resulta procedente concederla en la sentencias de segunda instancia, pues las partes tuvieron la oportunidad de debatirlo en el proceso, al menos en los alegatos de segunda instancia, y de esta manera como este asunto fue apelado por COLPENSIONES y la jurisprudencia de la CSJ de la que se citan las sentencias SL1688 de 2019 SL 2932 de 2020, SL 3202, 3571, 3706, 3707, 3708, 3709 y 3769 de 2021, la CSJ ha ordenó que las cuotas de

administración fueran devueltas indexadas, le asiste razón a Colpensiones en este aspecto, de la apelación, por lo que se ordenará en esta instancia, que las referidas cuotas de administración sean devueltas indexadas.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Finalmente, con respecto a la oposición de PROTECCIÓN S.A. a la condena en costas que se le impuso, con el argumento que siempre ha actuado acorde a los principios de buena fe, la buena concordancia con las buenas costumbres, y en apego a las normas establecidas para la época en cuanto a la afiliación de las personas a la entidad, no se entiende cómo tal aseveración incida en que no se le impongan costas a PROTECCIÓN S.A., pues finalmente resultó vencida en el proceso, que es el supuesto de hecho que establece el Artículo 365 de CGP para imponer las costas, por lo que la sentencia del a quo, será confirmando en este aspecto.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada será CONFIRMADA, ADICIONADA y PRECISADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. al haber salido vencida en el recurso de apelación interpuesto. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.1600.000.

## **7. DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia del 19 de mayo de 2022 proferida por el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **GLORIA PATRICIA MÚNERA PINEDA**

contra **COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.**, PRECISÁNDOLA en el sentido de que PROTECCIÓN S.A., debe devolver a Colpensiones la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

Igualmente, se ADICIONA el fallo de primera instancia en el sentido de declarar que la AFP PROTECCIÓN S.A. debe devolver a COLPENSIONES indexados los porcentajes gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima.

**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. en favor de la demandante. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2eb4662c5c0fea5bbfece559669b51122252d1291e36c20ed443bbcf81ed3cf6**

Documento generado en 13/04/2023 04:06:45 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**